

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Caso contra

(Sección 1ª) Caso Panteliou-Darne y Blantzouka contra Grecia. Sentencia de 2 mayo 2013

[TEDH\2013\48](#)



PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD: Limitaciones: prestación familiar por nacimiento de hijo: reclamación por impago: crédito que constituye un «valor patrimonial»: abuso de derecho: falta de objeción sobre el impago de la prestación durante más de diez y cinco años respectivamente: retraso en el ejercicio de las acciones de reivindicación del derecho: existencia en Derecho interno de recursos adecuados para reivindicar el pago de la prestación familiar en litigio: relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido: «justo equilibrio» entre las exigencias de interés general y los imperativos de protección del derecho de las interesadas al respeto de sus bienes: violación inexistente.

Jurisdicción: Protección Europea de Derechos Humanos

Demanda 2514325156/20082008

Demanda de dos ciudadanas griegas contra la República helenica, presentadas ante el Tribunal los días 22 y 21-05-2008, por privación injusta de su derecho a prestación familiar por nacimiento de hijo. Violación del art. 1 del Protocolo nº 1 al Convenio: inexistencia: **desestimación de la demanda**.

En el asunto Panteliou-Darne y Blantzouka contra Grecia

El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Primera), constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces: Isabelle Berro-Lefèvre, Presidenta, Mirjana Lazárova Trajkovska, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Erik Møse, Ksenija Turković, Dmitry Dedov, así como por el señor Søren Nielsen, Secretario de Sección,

Tras haber deliberado en privado el 10 de abril de 2012 y el 9 de abril de 2013,

Dicta la siguiente

SENTENCIA

PROCEDIMIENTO

1. El asunto tiene su origen en dos demandas (núms. **25143 / 2008** y 25156/2008) dirigidas contra la República helenica, que dos ciudadanas griegas, las señoras Dimitra Panteliou-Darne y Despina Blantzouka («las demandantes»), presentaron ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del [Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales](#) («el Convenio»), el 22 y 21 de mayo respectivamente.

2. Las demandantes están representadas ante el Tribunal por el señor F. Spyropoulos, abogado colegiado en Atenas. El Gobierno griego («el Gobierno») está representado por los delegados de su agente, los señores S. Spyropoulos y C. Poulakos, asesor y auditor respectivamente, del Consejo jurídico del Estado.

3. Las demandantes alegan, en particular, la violación de su derecho al respeto de sus bienes, garantizado por el artículo 1 del [Protocolo núm. 1](#).

4. El 25 de febrero de 2010, las demandas fueron comunicadas al Gobierno. Asimismo, en aplicación del artículo 29.1 del [Convenio](#), se decidió que la Sala se pronunciara al mismo tiempo sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.

HECHOS

I. CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

5. Las demandantes nacieron, respectivamente, en 1965 y 1962 y residen en Atenas.

6. En 1984 y 1990, respectivamente, fueron contratadas como azafatas por la compañía aérea Olympic Airways (en adelante «O.A.»), a la sazón empresa del sector público. El marido de la primera demandante trabajaba en el sector público, y el de la segunda trabajaba también en O.A. En septiembre de 1989 y marzo de 1996, cada una de ellas tuvo un hijo.

7. El artículo 11 de la Ley 1505/1984 de Reestructuración de las Escalas Salariales de la Función Pública, modificada por la Ley 2470/1997, preveía que si uno de los cónyuges era funcionario del sector público y el otro trabajaba en el «resto» de dicho sector, tal y como precisaba el artículo 6.1 de la Ley 1256/1982, solo uno de los cónyuges percibiría la prestación familiar. Según el artículo 6.1 de la Ley 1256/1982, la compañía O.A. formaba parte del resto del sector público.

8. En virtud de la referida legislación, O.A. no abonó la prestación familiar a las demandantes. En fechas 12 de febrero y 11 de enero de 2001, respectivamente, las interesadas interpusieron contra O.A. una demanda de reclamación de la prestación familiar con efectos retroactivos; 1.208.254 dracmas (3.545,87 euros) desde el 30 de septiembre de 1989, en el caso de la primera demandante y 478.406 dracmas (1.403,98 euros), desde el 30 de marzo de 1996, en el caso de la segunda. Igualmente solicitaban el pago anticipado de la cantidad mensual de 12.371 dracmas (36,31 euros) y 9.519 dracmas (27,94 euros), respectivamente, a partir de enero de 2001.

9. El 16 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia de Atenas desestimó la pretensión de la primera demandante por infundada (Decisión núm. 2083/2002). El 29 de enero de 2003, esta última interpuso recurso de apelación.

10. Entre tanto, el 13 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia de Atenas acogió la pretensión de la segunda demandante. Este órgano jurisdiccional rechazó la objeción de la compañía O.A. de ejercicio abusivo del derecho (Decisión núm. 2061/2002). El 26 de noviembre de 2002, la parte contraria interpuso recurso.

11. En fechas 17 de junio y 1 de julio de 2003, el Tribunal de Apelación de Atenas reconoció, por un lado, el derecho de las demandantes a la prestación solicitada, habida cuenta de que el Tribunal Supremo Especial, por Sentencia 3/2001 de 7 de marzo de 2001, había declarado inconstitucional el artículo 11 de la Ley núm. 1505/1984 por ser contrario al principio de igualdad. Por otro lado, el Tribunal de Apelación examinó las circunstancias en las que las interesadas habían reivindicado el derecho a la prestación en cuestión y si, con arreglo al artículo 281 del Código Civil, existía ejercicio abusivo de tal derecho. Con arreglo a dicha disposición, la ley no ampara que el ejercicio de un derecho sobrepase los límites de la buena fe, las buenas costumbres y el fin socio-económico del derecho en cuestión.

12. En particular, el Tribunal de Apelación señaló que, durante el período en litigio, las demandantes percibieron mensualmente su nómina, en la que se reflejaba de forma detallada su salario y sus cargas salariales. El Tribunal de Apelación señaló que todas las nóminas contenían un apunte según el cual en caso de desacuerdo con el cálculo del salario, los interesados podían

comunicar sus objeciones a la empresa. De lo contrario, se indicaba que la compañía O.A. consideraría que los interesados aceptaban el cálculo salarial realizado. Asimismo, el Tribunal de Apelación observó que las demandantes, en más de diez y cinco años, respectivamente, tras el nacimiento de sus hijos, nunca formularon objeciones a la empresa en lo referente al impago de la prestación en cuestión. Además, el tribunal señaló que, en el mismo período, otros empleados con hijos se quejaron a la empresa por no abonarles la citada prestación. El Tribunal de Apelación concluyó que la actitud de las demandantes durante un periodo tan largo permitió a O.A. alcanzar la conclusión legítima de que la cuestión de su relación salarial con las interesadas había quedado resuelta definitivamente. El Tribunal de Apelación apreció la preponderancia de dicho elemento para la gestión económico-financiera de la empresa; en efecto, O.A. tenía interés en conocer a su debido tiempo el número de empleados que discrepaban con sus salarios, para así poder proyectar sus obligaciones financieras en el futuro. En este sentido, el Tribunal de Apelación señaló que la concesión retroactiva de la prestación a todos los empleados de O.A. con derecho a la misma, ascendería a más de 5 millones de dracmas (14.673.513 euros aproximadamente) y socavaría la situación económica de la compañía aérea, que se enfrentaba a graves problemas económicos y estaba inmersa en un plan de saneamiento financiero en virtud de las Leyes 2271/1994 y 2602/1998. En lo referente a las pretensiones futuras de las interesadas, el Tribunal de Apelación inadmitió, por prematura, esta parte de sus recursos (Sentencias núms. 5076/2003 y 5690/2003).

13. En fechas 15 de abril y 10 de febrero de 2006, respectivamente, las demandantes interpusieron recurso de casación. Por dos Sentencias de 6 de noviembre de 2007, el Tribunal de Casación confirmó las sentencias recurridas y desestimó los recursos de las interesadas. En particular, el Alto Tribunal consideró razonable la interpretación del artículo 281 del Código Civil hecha por el Tribunal de Apelación al apreciar un ejercicio abusivo del derecho reconocido a las demandantes, en el sentido de la referida disposición (Sentencias núms. 1913/2007 y 1914/2007). Tales sentencias fueron aclaradas y declaradas conformes el 23 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, respectivamente.

II. LEGISLACIÓN INTERNA APLICABLE

14. El artículo 281 del Código Civil establece lo siguiente:

«La ley no ampara que el ejercicio de un derecho sobrepase manifiestamente los límites de la buena fe, las buenas costumbres o el fin social y económico de tal derecho.»

15. De la jurisprudencia del Tribunal de Casación se desprende que la aplicación del artículo 281 del Código Civil no solo presupone la inacción del beneficiario del derecho en cuestión. De su actitud debe inferirse, objetivamente y de buena fe, que no tiene intención de ejercitar tal derecho. En consecuencia, la ulterior reivindicación del derecho, junto a las graves consecuencias en la situación de la parte contraria, puede considerarse abusiva (véase Sentencias del Tribunal de Casación núms. 1752/1984 (Pleno), 62/1990 (Pleno), 232/2001).

16. Según la jurisprudencia del Tribunal de Casación, la renuncia por el empleado de su derecho a percibir su retribución es nula, en tanto en cuanto se refiera al salario mínimo previsto en la legislación aplicable o en los Convenios Colectivos de trabajo (véase, entre otras, Sentencia núm. 1089/2006). Asimismo, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la invocación por un Estado de dificultades económicas no es suficiente para eximirlo de su obligación de cumplir la legislación europea en materia de igualdad de género (véase, entre otras, [Sentencias núms. C-187/1998, 28.10.1999](#) y [C-196/2002, 10.3.2005](#)).

17. La disposición aplicable de la Ley 1505/1984 de Reestructuración de las Escalas Salariales de la Función Pública, vigente a la sazón, establece:

Artículo 11.6

«(...) Si uno de los cónyuges es funcionario público o empleado de una persona jurídica de derecho público o de la Administración Local, en activo o jubilado, y el otro es empleado, en activo o jubilado:

a) del resto del sector público, tal y como se especifica en el artículo 6.1 de la Ley 1256/1982.

b) de personas jurídicas de derecho público que no están incluidos en el concepto de sector público antes mencionado pero que, sin embargo, funcionan como entidades de utilidad pública o empresas del Estado, la prestación familiar solo se concederá a uno de los cónyuges, a elección de los interesados.»

18. En virtud de la Sentencia núm. 3/2001, el Tribunal Supremo Especial declaró la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 1505/1984 por ser contrario al principio de igualdad. En particular, el Alto Tribunal estimó que la discriminación entre funcionarios que se encuentran en igual situación familiar, por razones que no están relacionadas con su propio trabajo sino con el estatus de sus cónyuges, vulneraba el principio de igualdad. Asimismo, el Tribunal Supremo Especial consideró que tal diferencia de trato era también contraria al artículo 21 de la Constitución, disposición que consagra la protección de la familia, y según la cual la contribución de los cónyuges a la familia ha de ser equitativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. ACUMULACIÓN DE LAS DEMANDAS

19. Teniendo en cuenta la similitud de las demandas en cuanto a los hechos y a la cuestión de fondo que plantean, el Tribunal decide acumularlas y examinarlas conjuntamente en una sola y misma sentencia.

II. SOBRE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DEL PROTOCOLO NÚM. 1 AL CONVENIO

20. Las demandantes denuncian que se les privó injustamente de su derecho a la prestación familiar, en vulneración del artículo 1 del Protocolo nº 1 al [Convenio](#), el cual dispone:

«Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas.»

A. Sobre la admisibilidad

21. El Tribunal constata que esta queja no carece manifiestamente de fundamento, en el sentido del artículo 35.3(a) del [Convenio](#). Señala, también, que no se enfrenta a ninguna otra causa de inadmisibilidad. En consecuencia, ha lugar a declararla admisible.

B. Sobre el fondo

1. Tesis de las partes

22. En primer lugar, las demandantes aseveran que ejercitaron su derecho legítimo de reivindicar judicialmente sus pretensiones que, de hecho, no habían prescrito. Citan un extracto de la Sentencia núm. 701/2009 del Tribunal de Casación, en la que este último consideró que «(...) la inacción del titular de un derecho durante un período inferior al previsto para su prescripción y la convicción del obligado legalmente de que tal derecho no existe o no se ejercerá, no son suficientes, en principio, para convertir en abusivo el ejercicio del mismo». Las demandantes subrayan que la caducidad de un derecho antes de que prescriba amenaza la seguridad jurídica.

23. Las demandantes consideran que no hubo inacción por su parte y que no se les puede reprochar el no haber actuado contra su empresa en un momento en que se consideraba legítima su práctica de no abonar la prestación familiar. Además, a la sazón se encontraba pendiente ante el Tribunal Supremo Especial la cuestión de la constitucionalidad de dicha legislación. Las demandantes añaden que los órganos jurisdiccionales internos no deberían haberse referido al convencimiento de la compañía O.A. de que no reclamarían sus prestaciones, puesto que la empresa ya se enfrentaba a varias demandas interpuestas por otros empleados.

24. Según las demandantes, el monto de sus pretensiones (apartado 8supra) no era cuantioso ni especialmente susceptible de constituir un perjuicio para el interés general. Ello se confirmaría también por el hecho de que los tribunales internos acogieron demandas similares presentadas por otros empleados de O.A. Por último, subrayan que la mala gestión financiera de O.A. no puede servir de pretexto para vulnerar los derechos de los trabajadores.

25. El Gobierno replica que el extracto de la Sentencia 701/2009 del Tribunal de Casación mencionada por las demandantes, se ha sacado de contexto. Cita la continuación, que dice así: «En el supuesto de que el titular del derecho trate de invertir una situación establecida que produciría efectos desfavorables sobre el obligado, pero no necesariamente difíciles o insoportables, el ejercicio de este derecho puede resultar incompatible con la buena fe y las buenas costumbres y, por consiguiente; abusivo».

26. El Gobierno analiza seguidamente el concepto de abuso de derecho, en el sentido del artículo 281 del Código Civil (apartado 15supra) y concluye que, en el caso de autos, el ejercicio de la acción es abusivo: durante un largo periodo las demandantes no denunciaron el impago, por la compañía, de las prestaciones en litigio. Considera que las demandantes generaron así la convicción, en su empresa, de que no querían reivindicarlas. Destaca que un número suficiente de empleados había comenzado ya a cuestionar la legalidad de la práctica de O.A. de no pagar las prestaciones familiares, aunque dicha práctica fuera conforme a las Leyes 1414/1984 y 2470/1997. En 1994, un tercio de los empleados de O.A. ya había ejercitado ante los tribunales internos acciones similares a las de las demandantes. El Gobierno añade que el elevado importe de las costas judiciales no es una razón válida para eximir a las demandantes de su obligación de acudir antes a los tribunales. Dado el número de empleados de O.A. que interpuso demanda judicial, el Gobierno considera que el pago de las consiguientes prestaciones ascendería aproximadamente a 14.700.000 euros. Haciendo referencia a la mala situación económica de O.A., el Gobierno sostiene que el pago de semejante suma impediría la continuidad de la actividad de O.A. El Gobierno señala que la limitada cuantía de las pretensiones de las demandantes no basta para eliminar el carácter abusivo del ejercicio de su derecho.

27. Por último, la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley núm. 1505/1984 no incide en el carácter abusivo de la acción de las demandantes, máxime si se tiene en cuenta que acudieron a los tribunales internos semanas antes de la publicación de la Sentencia núm. 3/2001 del Tribunal Supremo Especial declaratoria de la inconstitucionalidad de la referida disposición.

2. Valoración del Tribunal

a) Sobre la existencia de un «bien» en el sentido del artículo 1 del Protocolo núm. 1

28. El Tribunal recuerda que un demandante solo puede alegar la violación del artículo 1 del Protocolo núm. 1 al [Convenio](#) en la medida en que las resoluciones que impugne se refieran a «bienes», en el sentido de esta disposición. La noción de «bienes» cubre tanto los «bienes actuales» como los valores patrimoniales, incluidos los créditos en virtud de los cuales el demandante pretenda tener, cuando menos, una «expectativa legítima» de obtener el goce efectivo de un derecho de propiedad [[Sentencia Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein contra Alemania \(GS\)](#) , núm. 42527/1998 aps. 82 a 83, TEDH 2001 VIII y Decisión Gratzinger y Gratzingerova contra República Checa(GS), núm. 39794/1998, ap. 69, TEDH 2002-VII]. Por otra parte, en lo referente al concepto de «expectativa legítima», el Tribunal ha dictaminado que cuando el interés patrimonial en cuestión sea de orden crediticio, solo podrá considerarse un «valor patrimonial» si tiene base jurídica suficiente en Derecho interno, por ejemplo, si es confirmado por jurisprudencia bien establecida de los tribunales [[Sentencia Kopecký contra Eslovaquia \(GS\)](#) , núm. 44912/1998, ap. 52, TEDH 2004-IX].

29. El Tribunal constata que todos los órganos de la jurisdicción civil que conocieron de la causa reconocieron a las demandantes el derecho a la prestación familiar, especialmente tras considerar la Sentencia 3/2001 del Tribunal Supremo Especial declaratoria de la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 1505/1984. En particular, las sentencias del Tribunal de Apelación de Atenas, confirmadas por el Tribunal de Casación, estimaron que las demandantes tenían derecho, en principio, a percibir la prestación familiar en litigio.

30. Por otra parte, el Tribunal señala que el Gobierno no discute la existencia del derecho en cuestión.

31. Ello es suficiente para que el Tribunal, a efectos del artículo 1 del [Protocolo núm. 1](#) , califique de «valor patrimonial» los créditos de las demandantes.

b) Sobre la existencia de una injerencia

32. El Tribunal señala que, tras la desestimación de sus demandas por los tribunales internos, las interesadas se vieron en la imposibilidad de cobrar, con efecto retroactivo, sus créditos referentes a la prestación familiar en cuestión, lo que, sin duda, constituye una injerencia en su derecho al respeto de sus bienes.

c) Sobre la justificación de la injerencia

33. No se discute que la injerencia estuviera «prevista por la ley», tal y como exige el artículo 1 del [Protocolo núm. 1](#) , y persiguiera el fin legítimo, como señalaron los tribunales internos, de garantizar la situación económica y el funcionamiento sin trabas de la compañía O.A. Sin embargo, corresponde al Tribunal examinar, a la luz de la norma general de este artículo, si se ponderaron las exigencias del interés general y los derechos de los individuos afectados. A este respecto, el Tribunal recuerda que la voluntad de garantizar un «equilibrio justo» entre las exigencias del interés general de la comunidad y los imperativos de la protección de los derechos fundamentales de la persona se refleja en la estructura de todo el artículo 1 y se traduce en la necesidad de una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido [véase, entre otras, *Sentencias Visti#š Perepjolkins contra Letonia (GS)*, núm. 71243/2001, aps. 108-109, [25 de octubre de 2012](#) ; *Rúspoli Morenés contra España*, núm. 28979/2007, ap. 36, [28 de junio de 2011](#)]. La comprobación de la existencia de tal equilibrio requiere un análisis global de los distintos intereses concurrentes.

34. En el caso de autos, la reivindicación por las demandantes de la prestación familiar, tras un largo período de más de diez y cinco años, respectivamente, llevó a los tribunales competentes a desestimar sus acciones por considerarlas abusivas. En efecto, el Tribunal de Apelación de Atenas vinculó el retraso en el ejercicio de tales acciones al interés legítimo de la compañía O.A. de conocer a su debido tiempo el número de empleados que discrepaban con sus salarios y de anticipar sus obligaciones financieras. Por lo tanto, la garantía de la viabilidad económica de O.A. fue preponderante en el razonamiento de los tribunales competentes para considerar abusivas las acciones en cuestión.

35. El Tribunal recuerda que, por lo general, el Estado dispone de un amplio margen de apreciación para adoptar medidas de orden general en materia económica o social (véase, por ejemplo, [Sentencias James y otros contra Reino Unido, 21 de febrero 1986](#) , ap. 46, serie A, núm. 98, [National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society y Yorkshire Building Society contra el Reino Unido, 23 de octubre de 1997](#) , ap. 80, Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-VII). Asimismo, el Tribunal tiene limitada competencia para verificar el cumplimiento del derecho interno ([Sentencia Håkansson y Sturesson contra Suecia, 21 de febrero de 1990](#) ap. 47, serie A, núm. 171 A), y su tarea no es sustituir a los tribunales internos. Es a las autoridades nacionales, y especialmente a los juzgados y tribunales, a quienes primero corresponde interpretar la legislación interna [[Sentencia Waite y Kennedy contra Alemania \(GS\)](#) , núms. 26083/1994, ap. 54, TEDH 1999-I].

36. Sin embargo, el papel del Tribunal consiste en determinar si las conclusiones alcanzadas por los tribunales nacionales son compatibles con los derechos que garantiza el Convenio y sus Protocolos. El Tribunal señala que, pese al silencio del artículo 1 del Protocolo núm. 1 en materia de exigencias procedimentales, un proceso judicial sobre el derecho al respeto de los bienes debe también ofrecer a la persona afectada la oportunidad de exponer su causa ante las autoridades competentes para impugnar, de forma efectiva, las medidas atentatorias a los derechos garantizados por esta disposición. Para garantizar el cumplimiento de este requisito, se ha de considerar los procedimientos aplicables desde una perspectiva general [véase [Sentencias Capital Bank AD contra Bulgaria](#) , núm. 49429/1999, ap. 134, TEDH 2005 XII (extractos); *Zafranias contra Grecia*, núm. 4056/2008, ap. 36, [4 de octubre de 2011](#)].

37. En el presente caso, el Tribunal señala que la decisión del Tribunal de Apelación de Atenas, confirmada por el Tribunal de Casación, de inadmitir los recursos de las interesadas se sustenta en el ejercicio abusivo, en términos del artículo 281 del Código Civil, del derecho a percibir la prestación familiar en cuestión. En otras palabras, los tribunales internos no cuestionaron el hecho de que las demandantes fueran titulares del derecho en cuestión, pero consideraron que la forma en que lo habían reivindicado entraba dentro del ámbito de aplicación del referido artículo, de acuerdo con su interpretación en Derecho interno. En consecuencia, la cuestión que suscita la presente demanda versa sobre los motivos aducidos por los tribunales competentes para aplicar el artículo 281 del Código Civil y, en general, sobre las garantías que rodean el proceso judicial en cuestión.

38. El Tribunal señala que el concepto de abuso de derecho es flexible por naturaleza. Presupone la existencia del derecho en cuestión y por ello, se distingue de la prescripción. Por consiguiente, el argumento de las demandantes según el cual sus pretensiones no habían prescrito, no significa necesariamente que su ejercicio no fuera, en este caso, abusivo. En efecto, el concepto de abuso de derecho conduce al debilitamiento del derecho en cuestión por los concretos requisitos que rodean su ejercicio. De ello se colige que este concepto implica la consideración por el tribunal competente de los elementos concurrentes en cada caso concreto.

39. En el presente caso, los tribunales internos alcanzaron el convencimiento de la existencia de abuso de derecho basándose, en primer lugar, en un elemento concreto del expediente: el apunte en todas las nóminas de las demandantes de que, en caso de desacuerdo con el cálculo del salario, podían comunicar sus objeciones a la empresa en el plazo de dos meses a partir de la recepción de cada nómina. Según las sentencias del Tribunal de Apelación de Atenas, confirmadas en casación, el hecho de que las demandantes, durante aproximadamente diez y cinco años tras el nacimiento de sus hijos, nunca hubieran formulado objeciones a la compañía O.A. en cuanto al impago de la prestación en cuestión, permitía a ésta legítimamente concluir que la cuestión de la relación salarial con las interesadas había quedado resuelta. El Tribunal no comparte el argumento de las demandantes de que la cuestión de la inconstitucionalidad de la Ley 1505/1984 les impidió acudir antes a los tribunales nacionales. En particular, el hecho de que el Tribunal Supremo Especial no se hubiera pronunciado aún sobre la cuestión carece de incidencia, puesto que las demandantes ejercitaron las correspondientes acciones civiles durante la pendencia del recurso de casación. Por otra parte, el Tribunal señala que, según indica el Gobierno, muchos compañeros de las demandantes, un tercio de los empleados de O.A., acudieron a los tribunales en 1994, cuando se aprobó el primer plan de saneamiento de la compañía O.A.

40. Asimismo, en el ejercicio de ponderación de los intereses individuales de las interesadas y los intereses económicos de la empresa, los tribunales internos tuvieron en cuenta el largo período de inacción de las demandantes antes de reivindicar el derecho en cuestión. En particular, los tribunales internos señalaron que, con el fin de anticiparse a sus obligaciones económicas, la compañía O.A. tenía un interés legítimo en conocer a su debido tiempo el número de empleados se opondría al tratamiento de sus salarios. Además, el Tribunal de Apelación de Atenas sustentó este argumento en dos elementos concretos: en primer lugar, la situación financiera general de O.A. que, en virtud de las Leyes 2271/1994 y 2602/1998, estaba siendo objeto de un plan de saneamiento económico y, en segundo lugar, la importante cantidad que la compañía O.A. adeudaría, en torno a los 14.700.000 euros, en el supuesto de que se concediera el pago retroactivo de la prestación a todos los empleados que tuvieran derecho a la misma. El Tribunal de Apelación estimó que el pago de dicha cantidad habría tenido graves efectos en cuanto a la viabilidad de la compañía O.A.

41. Habida cuenta de lo que antecede, el Tribunal considera que el procedimiento seguido ante los tribunales nacionales ofreció a las demandantes los recursos adecuados para reivindicar el pago de la prestación familiar en litigio. Las Sentencias del Tribunal de Apelación de Atenas, suficientemente motivadas y confirmadas en casación, concluían que el artículo 281 del Código Civil era aplicable y que había abuso del derecho reconocido a las demandantes. Por consiguiente, el procedimiento seguido por los tribunales internos no vulneró el "justo equilibrio" entre las exigencias de interés general y los imperativos de protección del derecho de las interesadas al respeto de sus bienes.

En consecuencia, no ha habido violación del artículo 1 del Protocolo núm. 1.

III. OTRAS VIOLACIONES DEL CONVENIO

42. Invocando el artículo 6.1 del [Convenio](#) , las demandantes denuncian que los tribunales que conocieron de su causa interpretaron la legislación interna de manera excesivamente formalista. Del mismo modo, ven en ello una vulneración del principio de igualdad de armas. Invocando también el artículo 6.1 en relación con el artículo 14 del Convenio, alegan haber sufrido discriminación por el hecho de que se inadmitieran sus demandas.

43. A la luz de la documentación obrante y en la medida en que es competente para conocer de las alegaciones formuladas, el Tribunal no revela ninguna violación de los derechos y las libertades fundamentales recogidos en el Convenio y sus Protocolos.

44. De ello se infiere que esta parte de la demanda carece manifiestamente de fundamento y ha de ser desestimada en aplicación del artículo 35, apartados 3 y 4, del Convenio.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD

1. Decide acumular las demandas y examinarlas conjuntamente en una sola sentencia;

2. Declara admisibles las demandas en cuanto a la queja relativa al artículo 1 del [Protocolo núm. 1](#) , y desestima el resto de las mismas;

3. Declara que no ha habido violación del artículo 1 del Protocolo núm. 1 al [Convenio](#) .

Hecha en francés, y notificada por escrito el 2 de mayo de 2013, de conformidad con el artículo 77, apartados 2 y 3, del Reglamento del Tribunal. Firmado: Isabelle Berro-Lefèvre, Presidenta - Søren Nielsen, Secretario.